

C.A. de Concepción

rtp

Concepción, diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

**VISTO:**

Se ha dictado sentencia definitiva, el seis de junio dos mil veintidós, en el Rol C-310-2021, del Juzgado de Letras de Tomé, que, en sus aspectos centrales, dispuso que se hizo lugar a la demanda de precario interpuesta por María Angélica Figueroa Sáez en contra de Hernán Alejandro Álvarez López, quedando acogida íntegramente; y por la cual, se ordenó restituir a la demandante el inmueble reclamado en autos, en la forma prevista en el fallo.

En contra del referido dictamen, la parte demandada recurrió de casación en la forma y apelación.

**I.- En cuanto al recurso de casación en la forma.**

1º) Que, como ya se anticipó, la parte demandada, dedujo recurso de casación en la forma, en contra de la sentencia definitiva dictada en esta causa, fundada en la causal establecida en el artículo 768 N° 9 del Código de Procedimiento Civil.

Explica al efecto, que con fecha 11 de enero de 2022, la actora solicitó se recibiera la causa a prueba, lo que ocurrió en la especie en resolución de fecha 25 de enero de 2022, conforme rola en folio N° 14 del proceso.

Luego, por presentación escrita de fecha 27 de enero de 2022, la actora se dio por notificada de manera escrita y expresa del auto de prueba de fecha 25 de enero de 2022 (folio 15).

A su vez, en un otrosí del mismo escrito, la actora solicitó se apercibiera a la demandada, de notificación por correo electrónico de la resolución que recibiera la causa a prueba, petición que no fue acogida por el tribunal.

Asevera que, sin embargo, se llevó adelante el proceso hasta el estado de citar a la partes a oír sentencia y proceder a su dictación, sin haberse notificado a su parte, conforme lo dispone el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, que establece que debe ser por medio



de cédula; siendo facultativo para disponer la notificación por medio electrónico señalado por las partes en su primera presentación, en tanto se califique como expedito y eficaz, conforme lo dispone el artículo 49 del mismo cuerpo legal, lo que no aconteció en autos.

Afirma que no hubo autorización para notificar por medio electrónico, y lo que fue validado por la resolución del otrosí de fecha 27 de enero de 2022, folio 15.

Es así que en los plazos de procedimiento comunes a las partes, entre estos, el que se genera a raíz de la causa a prueba, se debe tener una certeza absoluta y no controversial sobre su inicio de cómputo, como ha ocurrido en el caso de autos, donde se dice primeramente (folio 15), que no está emplazada la parte demandada de dicho cómputo, y luego más adelante, sin mediar recurso alguno, de oficio se cambia de parecer.

Manifiesta que el artículo 795, numerales 1 y 3 del Código de Procedimiento Civil, califican como trámites o diligencias esenciales en primera instancia: a) El emplazamiento de las partes en la forma prescrita en la ley; b) El recibimiento de la causa a prueba cuando proceda con arreglo a la ley.

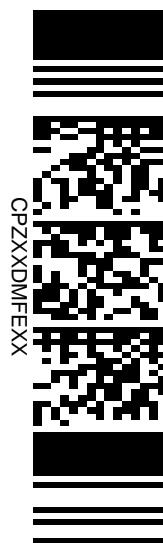
De esta forma, indica que no habiéndose notificado válidamente a su parte de la resolución que recibe a la prueba, la deja en la indefensión; dado que, no pudo rendir ningún tipo de prueba.

Por lo tanto, solicita se retrotraiga el proceso hasta el estado de notificarse por cédula a la demandada la resolución que recibe la causa a prueba; se prosiga con la ritualidad del procedimiento sumario, hasta el estado de dictarse una nueva sentencia definitiva de primera instancia.

**2°)** Que, en primer lugar, efectuada la revisión de la carpeta virtual de primera instancia, puede señalarse lo siguiente:

a.- A folio 14, con fecha 25 de enero de 2022, se dictó la resolución por la cual se recibió la causa a prueba.

b.- El referido dictamen, según aparece del historial informático de notificaciones, le fue notificado a la demandada por correo



electrónico el mismo día 25 de enero de 2022. Al respecto, cabe consignar que a folio 5, esa misma parte indicó una forma de notificación electrónica.

c.- A folio 16, en tanto, se dispuso tener por notificado a la parte demandante del respectivo auto de prueba, con la presentación que se hizo con fecha 27 de enero de 2022, y que consta en el folio 15.

d.- A folio 24, la parte demandante requirió la notificación por correo electrónico de la ya mencionada resolución, disponiendo el tribunal en el folio 25, a esta petición, lo siguiente:

*“Vistos: Atendido el mérito de autos, en que se constata en sistema de tramitación electrónica, que interlocutoria de prueba de folio 14, de 25 de enero de 2022, se encuentra notificada al apoderado de la parte demandada por correo electrónico, con la misma fecha de su dictación y, a la demandante con fecha 27 enero 2022, todo lo cual conduce que el término probatorio se encuentra vencido, pídase lo que corresponda.”*

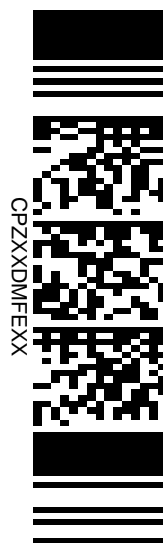
e.- A folio 26, consta que se citó a las partes a oír sentencia.

f.- A folio 28, se dictó la sentencia definitiva en la causa.

3º) Que al efecto, es evidente que el tribunal de la instancia determinó, como se explica de lo decidido a folio 24, que el respectivo de auto de prueba fue válidamente notificado a la demandada, mediante el correo electrónico que se le remitió el día 25 de enero de 2022.

4º) Que sobre el tema, el artículo 48 del Código de Procedimiento Civil, dispone que las resoluciones en que se reciba a prueba la causa, *“se notificarán por medio de cédulas que contengan la copia íntegra de la resolución y los datos necesarios para su acertada inteligencia.”*

A continuación, la misma normativa establece que *“también se podrán notificar por el tribunal al medio de notificación electrónico señalado por las partes, sus abogados patrocinantes y mandatarios judiciales de conformidad al artículo siguiente, previa solicitud de la parte interesada y sin que se requiera el consentimiento del notificado,*



*de lo cual deberá dejarse constancia en el sistema de tramitación electrónica del Poder Judicial.”*

5º) Que, es decir, la primera opción procedimental con el fin de lograr el adecuado emplazamiento de la resolución en análisis, es que lo sea por cédula, para luego, señalarse que sólo a petición de “*la parte interesada y sin que se requiera el consentimiento del notificado*”, puede el tribunal disponer que se efectúe a sus abogados patrocinantes y mandatarios judiciales, al correo electrónico que ha sido designado en los términos que indica el artículo 49 del Código de Enjuiciamiento Civil.

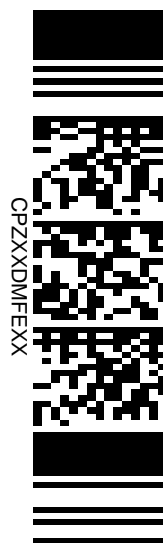
De manera entonces, que para que se proceda a notificar por correo electrónico el auto de prueba, se requiere que al menos una de las partes –la interesada-, realice la solicitud respectiva, y el tribunal acceda a tal exhortación.

6º) Que en tal sentido, es cierto que la notificación al correo electrónico de la resolución que recibió la causa a prueba, no habría sido, en principio, idónea para el emplazamiento que legalmente se requiere.

Sin embargo, no puede obviarse que pese a lo anterior, igual tomó conocimiento la demandada del citado dictamen, al serle enviado el correspondiente correo a la casilla electrónica que aportó, sin efectuar ningún reclamo de esta situación.

A su vez, más relevante es que tampoco lo hiciera tratándose de aquella resolución de folio 24, en la cual ya, sin ambages, se asentaba por el juzgador de la instancia, que el término probatorio había concluido, tomando en cuenta, precisamente, que se argumentaba que el 25 de enero de 2022, la había sido notificada por correo electrónico la resolución que recibía la causa a prueba al apoderado de la parte demandada.

En suma, ningún mecanismo procesal de impugnación ejerció la recurrente en su momento, planteando el tema sólo al proponer el recurso sometido al conocimiento de esta Corte.



7º) Que lo expuesto en el motivo que antecede, es trascendente para poder hacer prosperar la vía de impugnación en estudio, atendido lo que señala el artículo 769 del Código de Procedimiento Civil, pues es un requisito indispensable en el caso, *“que el que lo entabla haya reclamado de la falta, ejerciendo oportunamente y en todos su grados los recursos establecidos por la ley”*.

Al efecto, la exigencia antes señalada debía ser cumplida en la especie, al no ser de aquellos casos de excepción que refiere el mismo artículo 769 antes citado.

8º) Que, por lo tanto, al no haberse preparado el recurso, mediante el pertinente reclamo oportuno e integral, a través de los medios establecidos por la ley, llevará, en consecuencia a desestimar la casación en la forma impetrada por la demandada.

## **II.- En cuanto al recurso de apelación.**

### **VISTO:**

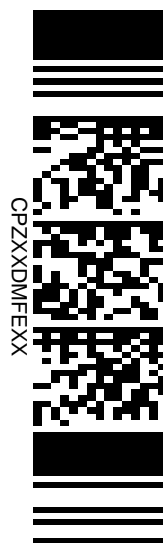
Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de los considerandos décimo tercero y décimo cuarto que se suprimen.

### **Y se tiene, además, presente:**

9º) Que según se plantea por la parte demandada, sustenta la ocupación del predio objeto del litigio, en que su padre Hernán Alberto Álvarez Marín, celebró un contrato de promesa de compraventa respecto referido inmueble.

10º) Que al respecto, ante esta Corte, en el folio 3 se acompañó el contrato de promesa al cual se aludió con antelación, en el que consta que con fecha 11 de agosto de 1982, Irma Sáez Sanhueza, en representación de Julio Figueroa Reyes, prometió vender a Hernán Alberto Álvarez Marín, la casa habitación ubicada en calle Santiago Webb, N° 299 de la ciudad de Tomé, estipulándose en la cláusula sexta, que *“En caso de fallecimiento de uno de los contratantes, la sucesión de estos, o las del mandante de doña Irma Sáez, darán cumplimiento a esta promesa de compraventa.”*

11º) Que, a su vez, también se aportó en el referido folio 3, el certificado de nacimiento del demandado, que da cuenta que es hijo



del citado promitente vendedor, el cual se encuentra fallecido, como aparece del respectivo certificado defunción.

Además, en la copia de inscripción del Registro de Propiedad del año 2004, del Conservador de Bienes Raíces de Tomé, N° 764, fojas 1840, se consigna la posesión efectiva de la herencia quedada al fallecimiento de Hernán Alberto Álvarez Marín, e indicándose al demandado de autos, como uno de sus herederos.

Asimismo, se hace expresa referencia en esta inscripción, a que es parte del haber hereditario, *“Un crédito en contra de doña Irma Sáez Sanhueza por Escritura de Promesa de Compraventa, celebrado en Concepción, con fecha 11/08/1982 sobre casa y sitio ubicado en Tome calle Santiago Webb, casa 299.-”*

**12°)** Que, por tanto, es ostensible en el caso en estudio, que el demandado ejerce la ocupación de la propiedad que se reclama, sustentado en el antes mencionado contrato de promesa de compraventa, de manera que no se da el supuesto exigido en el artículo 2195 inciso segundo del Código Civil, debiendo, en consecuencia, desestimarse la acción de precario intentada en esta causa.

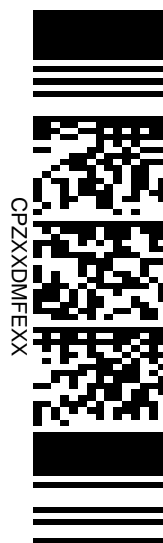
**13°)** Que, la restante prueba aportada en esta instancia en nada altera lo razonado con antelación.

**14°)** Que estimando que la actora ha tenido motivo plausible para litigar, se le eximirá de las costas de ambas instancias.

Por estas consideraciones, citas legales expresadas y lo dispuesto, además, en los artículos 144, 186, 768 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se resuelve:

**I.-** Que, se **rechaza**, sin costas, el recurso de casación en la forma, interpuesto por el demandado, Hernán Alejandro Álvarez López, respecto de la sentencia definitiva, de seis de junio dos mil veintidós, en el Rol C-310-2021, del Juzgado de Letras de Tomé.

**II.-** Que, **se revoca**, sin costas del recurso, la sentencia definitiva, de seis de junio dos mil veintidós, en el Rol C-310-2021, del Juzgado de Letras de Tomé, en sus decisiones II, III y IV, y, en su

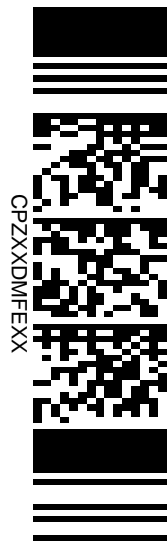


lugar, se dictamina que **se rechaza**, sin costas, la demanda de precario enderezada a folio 1, por María Angélica Figueroa Sáez en contra de Hernán Alejandro Álvarez López.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del ministro suplente Cristian Gutiérrez Lecaros, quien no firma no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, en razón de haber cesado en su suplencia y retornado a su tribunal de origen.

N°Civil-1800-2022.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Concepción integrada por Ministro Camilo Alejandro Alvarez O. y Fiscal Judicial Maria Francisca Duran V. Concepcion, diecinueve de enero de dos mil veintitrés.

En Concepcion, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

